

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 1 de octubre de 2020

Auto Interlocutorio

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-016-2015-00062-02
DEMANDANTE:	BLANCA LILIANA MONTOYA HERNANDEZ <a href="mailto:correo@chinguallasociados.com">correo@chinguallasociados.com</a> <a href="mailto:chingualasociados@hotmail.com">chingualasociados@hotmail.com</a>
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE LA CUMBRE - VALLE (averiguar correo)
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – REVOCA

Aprobada en Sala y Acta de la fecha. Convocatoria No. 37 del 1 de octubre de 2020.

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso apelación propuesto por la parte demandante contra el auto de sustanciación nro. 765 del 29 de julio de 2019<sup>1</sup>, proferido por el Juzgado 16 Administrativo de Cali, que ordenó el levantamiento del embargo y retención de los dineros que el municipio de La Cumbre – Valle tiene en Bancolombia, por tratarse de una cuenta con recursos del Sistema General de Participaciones, Regalías y Rentas.

II. ANTECEDENTES

Dentro del proceso ejecutivo adelantado por la señora Blanca Liliana Montoya Hernández, el Juzgado 16 Administrativo de Cali, mediante auto interlocutorio nro. 206 del 18 de marzo de 2015<sup>2</sup>, libró mandamiento de pago contra el municipio de La Cumbre – Valle, por las obligaciones contenidas en la sentencia nro. 0131 del 13 de septiembre de 2010, proferida por el Juzgado 13 Administrativo de Cali, confirmada mediante sentencia nro. 016 del 16 de agosto de 2012 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Por auto interlocutorio nro. 292 del 02 de mayo de 2019<sup>3</sup>, se decretó el embargo y retención de las sumas de dinero que a cualquier título la entidad ejecutada tenga en las entidades financieras Bancolombia CTA 469312002408 y Banco Agrario CTA 62193901730, limitando la suma hasta \$60.000.000.00 m/cte.

Posteriormente, y atendiendo un comunicado de Bancolombia que informa que las cuentas corrientes se encuentran identificadas como inembargables, el juzgado, en auto de sustanciación nro. 765 del 29 de julio de 2019, levantó el embargo.

<sup>1</sup> Folio 63

<sup>2</sup> Folios 1-2

<sup>3</sup> Folio 13

Contra la anterior decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación<sup>4</sup>, que fue concedido en el efecto devolutivo.

### **III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:**

Se trata del auto de sustanciación nro. 765 del 29 de julio de 2019 por el que el Juzgado 16 Administrativo de Cali ordenó el levantamiento del embargo de los dineros que la entidad ejecutada tenga en Bancolombia, porque, según lo informado por la entidad financiera, provienen del Sistema General de Participaciones, Regalías y Rentas propias con destinación específica para el gasto social del municipio, es decir, que son inembargables.

### **IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

La parte apelante indicó que el *a quo* vulneró el debido proceso, por cuanto debió poner primero en conocimiento del demandante la respuesta dada por Bancolombia frente al oficio del embargo, pues las entidades bancarias tienen el deber de dar cumplimiento de la orden de embargo, y cuando los recursos sean inembargables, quien debe oponerse a la medida es la entidad territorial y no la entidad bancaria.

Frente a la inembargabilidad contenida en el artículo 594 del CGP, expuso que, si bien la norma prohibió expresamente la embargabilidad de los bienes y recursos estatales, ese principio no es absoluto y así lo ha expresado la Corte Constitucional (2008 y 2013)<sup>5</sup> al contemplar tres excepciones en las cuales este principio de salvaguarda de los bienes del Estado puede ser quebrantado: los créditos laborales, el pago de sentencias judiciales y los títulos emanados del Estado que tengan una obligación clara, expresa y exigible. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Consejo de Estado (2017)<sup>6</sup>.

Manifestó que el Despacho debe aplicar el precedente, toda vez que en el presente crédito aplica una de las tres excepciones, pues proviene de una condena impuesta al municipio de La Cumbre por una sanción moratoria por el no pago de las cesantías, que es una prestación de carácter laboral.

### **V. CONSIDERACIONES:**

#### **V.1. PROBLEMA JURÍDICO**

El asunto que se discute se contrae a establecer si es procedente levantar la medida cautelar de embargo a las cuentas que el municipio de La Cumbre – Valle tiene en Bancolombia, por cuanto la entidad financiera informó que son de naturaleza inembargable, pues su origen es el Sistema General de Participaciones y de destinación específica y manejan recursos públicos con presupuesto municipal.

---

<sup>4</sup> Folios 28-32

<sup>5</sup> Sentencia C-1154 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández – expediente nro. D7297 del 26 de noviembre de 2008 y C-543 de 2013.

<sup>6</sup> CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2017, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Exp. nro. 08001-23-31-000-2007-00112-02 (3679-2014).

## V.2 TESIS

La Sala revocará la providencia apelada, puesto que el presente proceso tiene por objeto la ejecución de una prestación consistente en el pago de unos valores contenidos en una sentencia, por lo tanto, se configuran una de las excepciones de inembargabilidad de los recursos públicos establecida en la jurisprudencia constitucional y reiterada en jurisprudencia proferida por la Alta Corte de esta jurisdicción.

Para arribar a la anterior tesis, se realizó un recuento normativo y jurisprudencial acerca del proceso ejecutivo, las medidas cautelares, la embargabilidad de las cuentas de las entidades estatales y luego se abordó el caso concreto.

## V.3. RECUESTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DEL PROCESO EJECUTIVO Y LAS MEDIDAS CAUTELARES:

### • DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO EJECUTIVO:

La Ley 1437 de 2011 no estableció procedimiento para el proceso ejecutivo, pero el artículo 306 dijo que en los aspectos no contemplados se seguiría el Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Así las cosas, los procesos ejecutivos administrativos se deben tramitar por las reglas del proceso ejecutivo de que trata el artículo 422 y siguientes de la Ley 1564 de 2012. Posición que ha sido reiterada por el Consejo de Estado<sup>7</sup> al manifestar que el proceso ejecutivo está regulado integralmente por el CGP. Textualmente dijo:

**“ Los trámites que se surtan al interior de todo proceso de ejecución, incluyendo la presentación de excepciones<sup>8</sup>, realización de audiencias<sup>9</sup>, sustentaciones y trámite de recursos<sup>10</sup>, también se sujetarán a las previsiones y formalidades del Código General del Proceso, pues el proceso ejecutivo, se debe desarrollar con base en las disposiciones de éste último estatuto procesal y no del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dado que en la normatividad procesal administrativo, no existen normas o reglas especiales para este proceso especial de cobro ejecutivo. (negrillas fuera del texto original)**

### • MEDIDA CAUTELAR:

Respecto a las medidas cautelares en los procesos ejecutivos, el CGP establece que, desde la presentación de la demanda, el ejecutante puede solicitar el embargo y

<sup>7</sup>CONSEJO DE ESTADO. i) Sección Segunda, Subsección B, radicado 680012333000 2016-01034 01 C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; ii) Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02814-00 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, entre otras.-’

<sup>8</sup> Ver artículo 442 de la Ley 1564 de 2012.

<sup>9</sup> Ver artículos 372 y 373 C.G.P.

<sup>10</sup> Ver artículos 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 y 330 del C.G.P.



RADICACIÓN : 016-2015-00062-02  
Acción : EJECUTIVO  
Ejecutante : BLANCA LILIANA MONTOYA HERNANDEZ  
Ejecutado : MUNICIPIO DE LA CUMBRE - VALLE  
Asunto : APELACIÓN DE AUTO

4

secuestro de los bienes del ejecutado. Los artículos 593<sup>11</sup> y 599<sup>12</sup> del CGP establecen lo pertinente a las medidas de embargo y secuestro y su respectivo procedimiento.

Para realizar embargos de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4<sup>13</sup>, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%). La entidad, por su parte, debe constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación.

### • EMBARGABILIDAD DE LAS CUENTAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL<sup>14</sup>:

El artículo 63 de la Constitución Política consagra la inembargabilidad de ciertos bienes del Estado y faculta al legislador para que determine qué otros activos estatales tienen esa misma naturaleza, así:

*“Artículo 63. - Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.*

En ejercicio de dicha potestad, el legislador ha establecido en distintos cuerpos normativos la inembargabilidad de los recursos contenidos en el Presupuesto General de la Nación o los que son girados a las entidades territoriales para inversión social mediante el Sistema General de Participaciones.

<sup>11</sup> Artículo 593:

(.....)

Para efectuar embargos se procederá así:..

4. El de un crédito u otro derecho semejante se perfeccionará con la notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que para hacer el pago deberá constituir certificado de depósito a órdenes del juzgado. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que presencie el hecho.

Al recibir el deudor la notificación deberá informar acerca de la existencia del crédito, de cuándo se hace exigible, de su valor, de cualquier embargo que con anterioridad se le hubiere comunicado y si se le notificó antes alguna cesión o si la aceptó, con indicación del nombre del cesionario y la fecha de aquella, so pena de responder por el correspondiente pago, de todo lo cual se le prevendrá en el oficio de embargo.

La notificación al deudor interrumpe el término para la prescripción del crédito, y si aquel no lo paga oportunamente, el juez designará secuestre quien podrá adelantar proceso judicial para tal efecto. Si fuere hallado el título del crédito, se entregará al secuestre; en caso contrario, se le expedirán las copias que solicite para que inicie el proceso...

**10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo...**(negritas fuera del texto).

<sup>12</sup> Artículo 599. Embargo y secuestro. El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad...

En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento. La caución deberá prestarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto que la ordene. Contra la providencia anterior, no procede recurso de apelación. Para establecer el monto de la caución, el juez deberá tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito.

La caución a que se refiere el artículo anterior, no procede cuando el ejecutante sea una entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o una entidad de derecho público

<sup>13</sup> “El de un crédito u otro derecho semejante se perfeccionará con la notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que para hacer el pago deberá constituir certificado de depósito a órdenes del juzgado. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que presencie el hecho”.

<sup>14</sup> Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, C.P. MARÍA ADRIANA MARÍN, 14 de marzo de 2019, Radicación número: 20001-23-31-004-2009-00065-01 (59802).

Estas disposiciones normativas e incluso algunas de igual contenido proferidas previo a la expedición de la Constitución de 1991 han sido objeto de control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, Corporación que ha establecido que, aunque la regla general sea la inembargabilidad de dichos recursos, **hay eventos excepcionales en que se debe permitir su embargo.**

El primero de esos pronunciamientos fue la sentencia C-546 de 1992, en la que se analizó la constitucionalidad de los artículos 8° parcial y 16 de la Ley 38 de 1989, y se estableció que las normas acusadas se ajustan a la Constitución bajo el entendido de que *“en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”*.

Posteriormente, en sentencia C-103 de 1994, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de unos apartes del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, *“por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil”*, en el entendido que *“cuando se trata de un acto administrativo definitivo que preste mérito ejecutivo, esto es, que reconozca una obligación expresa, clara y exigible, obligación que surja exclusivamente del mismo acto, será procedente la ejecución después de los diez y ocho (18) meses, con sujeción a las normas procesales correspondientes. Pero, expresamente, se aclara que la obligación debe resultar del título mismo, sin que sea posible completar el acto administrativo con interpretaciones legales que no surjan del mismo”*.

Luego, mediante sentencia C-357 de 1997, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996, que consagra la inembargabilidad de las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. En dicha providencia, la Corte señaló que *“los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto —en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos— y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”*.

Estos pronunciamientos fueron abordados de manera sistemática en la sentencia C-1154 de 2008, en la que, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 21 parcial del Decreto 28 de 2008, *“por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones”*, se construyó la línea jurisprudencial de la embargabilidad de los recursos públicos y se estableció que, pese a que la regla general sea su carácter inembargable, hay situaciones en las que resulta plausible permitir el embargo. Además, precisó que dentro de estas excepciones se encuentran aquellos recursos que tienen destinación específica para inversión social —como los del SGP—, cuando excepcionalmente no haya otras cuentas o recursos que resulten suficientes para garantizar el pago de las acreencias, en aras de garantizar el respeto de

otros valores constitucionales como *“el reconocimiento de la dignidad humana, el principio de efectividad de los derechos, el principio de seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y la necesidad de asegurar la vigencia de un orden justo, entre otros”*.

En ese mismo pronunciamiento, la Corte Constitucional precisó que la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos es una respuesta a *“la necesidad de armonizar esa cláusula [la de inembargabilidad] con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, [por lo que] la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada”*.

Así las cosas, **la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos se presenta cuando lo que se reclama tiene que ver con i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, ii) el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias y iii) la ejecución de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título emanado del Estado.**

Atendiendo la línea jurisprudencial trazada por el Máximo Órgano Constitucional, se concluye que la norma de inembargabilidad planteada en el artículo 594 del CGP no solo admite las excepciones que el propio legislador establezca, sino que adicionalmente deben tenerse en cuenta las precisas excepciones desarrolladas por la Corte Constitucional. En especial, en asuntos donde está de por medio el cumplimiento de sentencias judiciales proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en las que se pretenda el reconocimiento de acreencias laborales y pensionales, que gozan de una protección especial. En esos eventos, la aplicación simple y llana de la prohibición de embargar recursos del Presupuesto General de la Nación, sin tener en cuenta la interpretación constitucional va en contravía de los pilares fundamentales de un Estado Social de Derecho.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 21 de julio de 2017<sup>15</sup>, que estudiaba una petición de medida cautelar, consistente en el embargo de los recursos del FOMAG, precisó que la legislación vigente y la jurisprudencia de la Corte Constitucional prevén que la regla de inembargabilidad de los recursos públicos debe ceder ante la satisfacción de obligaciones de estirpe laboral contenidas en una sentencia judicial, eventos en los cuales se puede acudir ante el juez administrativo para perseguir su pago, siempre y cuando la deudora no hubiese adoptado las medidas para satisfacerlos en los términos del artículo 192 del CPACA o 177 del CCA, según corresponda, señaló:

*“( ) En suma, tanto la legislación vigente como la jurisprudencia constitucional que la ha depurado establecen que, **no obstante el principio de inembargabilidad de los recursos públicos sirve de base para el desarrollo del Estado social de derecho,***

<sup>15</sup> Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección B. Exp.: 08001-23- 31-000-2007-00112-02 (3679-2014). Consejero Sustanciador: Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Medio de control: Proceso ejecutivo.

**su aplicación cede cuando de satisfacer ciertas obligaciones se trata, puntualmente si estas son de estirpe laboral, se derivan de sentencias judiciales o constan en títulos emanados de la Administración.**

*Por ello, en el evento de acudir ante un juez de la República para perseguir el pago de esa gama de créditos, los recursos del presupuesto general podrán sustraerse del patrimonio de la Nación, en igual medida a otros bienes preliminarmente inembargables, cuando la entidad deudora no haya adoptado las medidas necesarias para satisfacerlos en los términos de los artículos 192 del CPACA o 177 del CCA, según corresponda, salvo cuando el crédito sea de naturaleza contractual, caso en el que se aplicarán los términos del contrato (...).*

*En conclusión, frente a eventos relacionados con la satisfacción de créditos u obligaciones de carácter laboral, así como aquellos derivados de contratos estatales y los reconocidos en fallos judiciales, el principio general de inembargabilidad de los recursos públicos pierde su supremacía, pues su afectación es necesaria para hacer efectivos otros principios de orden fundamental como la igualdad, la dignidad humana y el derecho al trabajo, cuya garantía también corre por cuenta del Estado (...)*  
*(Negrilla y subraya fuera de texto)*

Esa posición fue reiterada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de diciembre de 2017<sup>16</sup>, que, en sede de acción de tutela, señaló la obligatoriedad del precedente fijado por la Corte Constitucional tratándose de la aplicabilidad de las excepciones al principio general de inembargabilidad de los recursos públicos:

*“(...) De conformidad con lo analizado en precedencia, la Sala considera que el Juzgado al denegar el embargo de los dineros depositados en la cuenta de Fondos Especiales, los cuales hacen parte del presupuesto general de la Nación, para respaldar el pago de obligaciones laborales reconocidas en una sentencia judicial, no sólo **desconoció el precedente jurisprudencial) sentado por la Corte Constitucional en relación con el principio de inembargabilidad de los recursos públicos y sus excepciones**, sino que también incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 594 del CGP, lo que implica la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del actor.*

***Lo anterior, habida cuenta de que como se ha insistido a lo largo de esta sentencia, la prohibición de embargo de los recursos públicos siempre ha estado presente en nuestro ordenamiento jurídico y ha sido declarada exequible por la Corte Constitucional, la cual ha indicado de manera reiterada, pacífica y uniforme cómo deben ser interpretadas las disposiciones que contienen esta regla y ha fijado las excepciones a la misma.***

*La Sala destaca que el hecho de que el aludido principio fuese incluido nuevamente en el CGP y el CPACA, no implica per se que fueron derogadas las demás disposiciones que también lo contenían, salvo las previstas en el CPC y el CCA, ni que se deba desconocer la interpretación que de las mismas efectuó la Corte, **máxime si se tiene en cuenta que el fin perseguido en todas ellas es el mismo, que no es otro que el de ordenar la prohibición de embargar las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, cuya existencia en el ordenamiento jurídico está condicionada a la interpretación que ha hecho la Corte y que, conforme se afirmó en la sentencia C-543 de 2013, siguen vigentes** e incluso deben ser atendidas por los operadores judiciales para la aplicación del parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA y los numerales 1, 4 y el parágrafo del artículo 594 del CGP, aunado a que esta última disposición permite*

<sup>16</sup> Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Consejera ponente: María Elizabeth García González. Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01532-01 (AC).

*invocar excepciones a la regla general siempre y cuando estén contenidas en la ley (..)". (Negrilla y subraya fuera de texto)*

- **EL TRÁMITE PARA EL EMBARGO DE RECURSOS QUE TIENEN CARÁCTER DE INEMBARGABLES**

El artículo 594 del CGP enlista los bienes que tienen el carácter de inembargables. No obstante, el párrafo de ese mismo artículo prevé la posibilidad de embargar recursos de esa naturaleza, pues describe un trámite para ello. El párrafo dispone:

*“PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.*

*Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.*

*En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene”.*

De conformidad con lo anterior, si el embargo recae sobre recursos que tengan el carácter de inembargables, el funcionario judicial deberá indicar el fundamento legal para decretar esa medida cautelar.

Ese precepto normativo también establece que las entidades destinatarias de la orden de embargo pueden abstenerse de registrar la medida cautelar sobre los bienes y recursos descritos en el artículo 594 del CGP, cuando no se indique el fundamento de la excepción al principio de inembargabilidad, es decir, cuando la orden de embargo no exponga por qué, a pesar de la naturaleza de los recursos, debe aplicarse el embargo de los dineros. En ese evento, las entidades deberán informar a la autoridad judicial sobre el no acatamiento de la medida cautelar, para que esta, en un término de tres días a la comunicación de no acatamiento de la medida cautelar, manifieste si procede alguna excepción al principio de inembargabilidad.

Si dentro del término de los tres días siguientes a la comunicación del no acatamiento de la medida cautelar, la autoridad judicial insiste en el embargo, las entidades destinatarias deberán acatarlo. En caso contrario, es decir, si dentro de los tres días siguientes a la comunicación del no acatamiento de la medida cautelar la autoridad judicial guarda silencio, la medida cautelar se entenderá revocada.

#### V.4. CASO CONCRETO:

De conformidad con el artículo 328<sup>17</sup> del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306<sup>18</sup> del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutada, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Como punto de inconformidad, la parte apelante indicó que se debe aplicar el precedente, toda vez que el presente crédito aplica una de las tres excepciones, pues proviene de una condena impuesta al Municipio de La Cumbre, por el pago de una sanción moratoria por el no pago de las cesantías, que es una prestación de carácter laboral.

Conforme a la normativa y jurisprudencia relacionada, la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos se presenta cuando lo que se reclama tiene que ver con:

- i) La necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas,
- ii) El pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias y
- iii) La ejecución de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título emanado del Estado.

La Sala encuentra que, en el sub lite, la demanda ejecutiva pretende el cumplimiento de la sentencia nro. 131 del 13 de septiembre de 2010, proferida por el Juzgado 13 Administrativo de Cali, confirmada por esta corporación mediante sentencia nro. 016 del 16 de agosto de 2012, que dispuso reconocer y pagar a la señora Blanca Liliana Montoya Hernández la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, consistente en el cobro de una obligación clara, expresa y exigible.

En tal virtud, la obligación que se pretende ejecutar está referida al pago de una sentencia laboral, de tal forma que se configura uno de los supuestos en los que el principio de inembargabilidad sufre una excepción, esto es, que se pretenda el cobro ejecutivo de una sentencia proferida por esta jurisdicción, razón por la que resulta procedente decretar la medida cautelar solicitada por la parte ejecutante.

En tal sentido, la Sala revocará el auto nro. 765 del 29 de julio de 2019, proferido por el Juzgado 16 Administrativo Oral de Cali, por medio del cual se ordenó el levantamiento

<sup>17</sup> ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

<sup>18</sup> ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

RADICACIÓN : 016-2015-00062-02  
Acción : EJECUTIVO  
Ejecutante : BLANCA LILIANA MONTOYA HERNANDEZ  
Ejecutado : MUNICIPIO DE LA CUMBRE - VALLE  
Asunto : APELACIÓN DE AUTO



10

del embargo y retención de los dineros que el Municipio de La Cumbre Valle, tiene en Bancolombia.

En consecuencia, se

### RESUELVE:

**PRIMERO: REVOCAR** el auto interlocutorio nro. 765 del 29 de julio de 2019, proferido por el Juzgado 16 Administrativo de Cali.

**SEGUNDO:** En firme esta providencia, **DEVOLVER** el expediente al Despacho de origen, previas anotaciones en el Sistema Judicial Siglo XXI.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los magistrados,

PATRICIA FEUILLET PALOMARES

LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT